

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 24° Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-31891-2019

CARATULADO : PEREZ/ FISCO DE CHILE

Santiago, a treinta y uno de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 5 de noviembre de 2019, doña Paz Becerra Urzúa, abogado, en representación de don **Mario Evans Meza Silva**, pensionado; don **Álvaro Florín Bernal Gaete**; don **Rafael Orlando Silva Solís**, pensionada; y doña **Claudia Andrea Pérez Videla**, profesora, todos domiciliados para estos efectos en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°252, oficina 42, comuna de Santiago, dedujo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de **Fisco de Chile**, representada por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, ambos domiciliados en Agustinas 1687, Santiago, pretendiendo se condene a la demandada a pagar a los actores, la suma de \$150.000.000, para cada uno de ellos, más intereses y reajustes, a contar de la notificación de la demanda o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad, con costas.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

Sustenta su pretensión en que el actor, don **Mario Meza Silva**, fue detenido por razones políticas, el 6 de noviembre de 1973, siendo llevado, primero, al Regimiento Rancagua de Arica, donde estuvo hasta el 11 de septiembre de 1974, siendo objeto de diversas tipos de torturas y mantenido incomunicado, para posteriormente, ser llevado a la Cárcel de Arica y después a la Cárcel de Iquique, volviendo, nuevamente, a la Cárcel de Arica, hasta noviembre de 1976, todos lugares donde fue golpeado de puños, pies y culatazos, por gendarmes y militares, lo vendaban, sujetaban con amarras sus muñecas y tobillos, los hacían creer que les dispararían o que los fusilarían, algunos días se llevaban a compañeros que no volvían, le pegaban en las orejas, le sumergían la cabeza en tambores, a veces cuando se desmayaban de dolor, los devolvían. También les aplicaban electricidad, siempre buscando nombres, que desconocía. Alega que estuvo privado de libertad por más de tres años. Después salió del país a Suecia, como refugiado político, en 1978, siendo autorizado para volver, recién, en 1994.

Tal actor, refiere que guarda recuerdos terribles de esos lugares, costándole mucho recomponer su vida y dejar el miedo atrás, perdió contacto con su hogar y su familia y el derecho de vivir en su propio país, todas razones por las cuales fue reconocido como víctima de violaciones a los derechos humanos, en Nómina de personas reconocidas como víctimas, de la Comisión Valech I, cuyo registro es el N°14.981.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

Relata que el actor, don **Álvaro Bernal Gaete**, fue aprehendido por policía de investigaciones de Arica y llevado a la Fiscalía Militar, para después pasar al Centro de Detención Preventiva, donde era incomunicado, interrogado, con malos tratos verbales, siendo liberado después de un año y dos meses, por falta de méritos, periodo en el cual lo golpeaban en costillas y piernas, también, en rodillas con culatas de sus armas, lo amenazaban de muerte, apenas dormía, no podía comer, aún sigue soñando con la situación, por todo lo cual, fue reconocido como víctima afectada por violaciones a los derechos humanos, en Nómina de personas reconocidas como víctimas, de la Comisión Valech I, cuyo registro es el número 3.089.

Cuenta que el actor, don **Rafael Silva Solís**, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, cuando estaba trabajando en Electro Andina-Bolocco de Arica, siendo él, dirigente sindical de las juventudes socialistas, fue llevado al Regimiento Arica, después a Cárcel Baquedano, estando detenido más de 1 años y 2 meses, periodo en el cual fue golpeado en sus testículos, utilizando culata de fusiles, reiteradamente, lo apuntaban con fusil en la nuca, de madrugada, simulando fusilamiento, los hacían volver en medio de pasillo con combos, patadas y culatazos, a veces se llevaban a compañeros y no volvían, adelgazó mucho, los amenazaban con matar a su familia, no sabía si viviría, todo lo cual provocó que fuera reconocido como víctima de violaciones a los derechos humanos, en Nómina de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

personas reconocidas como víctimas de Comisión Valech I, siendo su registro el número 23.427.

Indica que la actora, doña **Claudia Pérez Videla**, relata que su madre fue llevada detenida el 3 de enero de 1974, al Regimiento Rancagua de Arica, lugar donde le vendaron los ojos, ataron de manos y la llevaron a Cárcel de Mujeres, donde estuvo casi 5 meses, en celdas frías y reducidas, turnándose con las demás, para poder dormir, dándole la preferencia cuando comenzó a notarse su embarazo. La interrogaba, con golpes en el rostro, piernas y orejas, apenas le daban comida, a veces se llevaban a algunas presas y no volvían, le daban vuelta sus cosas, incluso camas que habían traído, tuvo síntomas de pérdida, la hacían caminar a los controles y no la dejaban ver a su padre, al nacer, tuvo problemas con sus sistema nervioso, lo que continúa hasta la actualidad, debiendo someterse a tratamientos psiquiátricos hasta los 7 años, en Tacna, despertando durante la noche llorando y con miedo a algo que no puede explicar. Por dichas razones, fue reconocido como víctima de violaciones a derechos humanos, en Nómina de personas reconocidas como víctimas, de la Comisión Valech I, siendo su registro número 6.741.

Alega que la responsabilidad y obligación de reparar del Estado, proveniente de las graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en crímenes de lesa humanidad, vulnerando instrumentos de derecho internacional, principalmente, los artículos 1 , 3 y 5 de la Declaración Universal



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

de Derechos Humanos; 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles o Degradantes de las Naciones Unidas; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; los Principios de Nuremberg; los Convenios de Ginebra de 1949; la Convención para Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y las normas lus Cogens relativas a crímenes internacionales.

Señala que la responsabilidad del Estado nace al momento de la comisión del ilícito atribuible al mismo Estado, citando una serie de normas de derecho internacional al efecto, y que haría responsable al Estado de la reparación de los daños producidos, por violaciones a los derechos humanos.

Hace presente que la Corte IDH, se ha pronunciado respecto de la relación de los programas administrativos y otras medidas de reparación, en cuanto a que la verdad histórica no puede sustituir la verdad a través de los procesos judiciales; y que no debe confundirse la prestación de servicios sociales con las reparaciones a que tienen derecho las víctimas en razón del daño específico generado por la violación de derechos humanos, estando consagrado el derecho a reparación en diversos instrumentos internacionales que describe en su libelo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

Describe los requisitos que serían necesarios para que nazca la obligación de reparación por el Estado de Chile, de acuerdo a obligaciones internacionales contraídas, los que corresponderían: violación de una obligación internacional, referidos a graves violaciones a los derechos humanos; y que el autor o autores sean agentes del Estado

Reclama, también, que la obligación de reparar los perjuicios que causan los órganos de la administración, está reconocida en la Constitución y en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, invocando para su pretensión, lo previsto en los artículos 4, 5, 6, 7, 38 de la Constitución Política de la República; 1, 3, 4, 44 de la Ley N°18.575, siendo la responsabilidad del Estado de derecho público.

Cita doctrina y jurisprudencia para sustentar su pretensión, que reproduce en parte en su libelo, reclamando que la situación de auto corresponde a un delito de lesa humanidad.

Rechaza la aplicación de normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, por no tratarse de un delito común, ante lo cual, la acción de reparación sería imprescriptible, según normas de derecho internacional, en especial los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos y los tratados internacionales en la materia ratificados por Chile, citando al efecto , doctrina, y jurisprudencia nacional e internacional.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

Expresa que las graves violaciones narradas, produjeron un profundo, extenso, grave y perdurable daño moral, que ha marcado para siempre a quienes lo padecieron, cuya reparación debe ser integral, citando al efecto una serie de principios.

Resume una serie de requisitos, que se darían en el caso de autos, para poder indemnizar, los que corresponderían a: existencia de una acción u omisión de un órgano del Estado; existencia de un daño, que por la grave violación, debe presumirse; nexo causal; e inexistencia de causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad.

Con fecha 19 de diciembre de 2019, contesta la demanda el Fisco de Chile, solicitando su rechazo, con costas, o en subsidio, se rebaje sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido, con fundamento, en primer lugar, en la excepción de reparación integral, por haber resultado ya indemnizado los actores, dado que conforme al ámbito de la llamada justicia transicional, se establecieron medios de reparación, especialmente para reparar el daño moral de las víctimas, por los cuales el Estado ha desembolsado a diciembre de 2015, una suma total de \$706.387.596.727, entre los cuales, se concedió a los demandantes una pensión al amparo de la Ley N°19.992, anual y reajutable de \$1.353.798, para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284, para beneficiarios de 70 o más años y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años. Además, se concedieron otros derechos, como gratuidad en prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

Integral de Salud en los servicios de salud del país, con la sola inscripción en la correspondiente oficina, cuyo programa cuenta con equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del programa, que incluye apoyo técnico y rehabilitación física; en el ámbito educacional, se concedieron becas de estudios superiores y gratuidad en educación básica y media; y beneficios en vivienda a través de subsidios.

Indica que lo anterior, es sin perjuicio, de las reparaciones simbólicas, como actos positivos de reconocimiento, dirigidos esencialmente, a reducir el daño moral padecido por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como lo son un memorial en el Cementerio General en Santiago; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, fijado para el 30 de agosto de cada año; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; y la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo del país, todo lo cual ha implicado grandes gastos económicos del Estado.

Alega que, por lo demás, resultaría incompatible la pretensión indemnizatoria de los actores, con los beneficios establecidos en la Ley N°19.123 y evitar así, también, un sistema compensatorio que no genere desigualdades, indicando que existe identidad entre lo pedido y las reparaciones realizadas.

Expresa que la Corte Interamericana de Justicia ha valorado el esfuerzo del Estado de Chile, en su política de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

reparación de violaciones a los derechos humanos e, incluso, ha rechazado pretensiones indemnizatorias de personas que ya han recibido beneficios del Estado por ese motivo.

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, la que sustentó en lo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal, considerando que aún, pudiendo entenderse suspendida la acción durante la dictadura militar, por imposibilidad de las víctimas de poder ejercer dicha acción, igualmente desde la restauración de la democracia a la fecha de notificación de la demanda producida el 2 de diciembre de 2019, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción, como también, el plazo de extinción ordinaria del artículo 2515 del Código Civil.

Expresa que la imprescriptibilidad es una cuestión extraordinaria y requiere, siempre, de declaración explícita, que en el caso no existiría, además, que la indemnización, en caso alguno, puede tener un carácter punitivo, ni de desigualdad, precisando que ninguno de los instrumentos internacionales de derechos humanos aludidos por los actores establecen la imprescriptibilidad de acciones patrimoniales derivadas de delitos de lesa humanidad, ni prohíben la aplicación del derecho interno, citando y reproduciendo al efecto unos fallos de la Corte Suprema.

Alega, por otro lado, que la indemnización pretendida resultaría excesiva, la cual no puede constituir una fuente de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

lucro o ganancia, debiendo el tribunal, en subsidio, regular el daño moral, considerando los pagos ya recibidos del Estado.

En cuanto al pago de reajustes e intereses, hizo presente que solo procederían una vez que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, dado que solamente en esa época se establecería la obligación.

Con fecha 26 de diciembre de 2019, replica el actor, ratificando lo expresado en su demanda y señalando, respecto de la excepción de reparación integral, que los argumentos de la contraria son errados, ya que los pagos, si bien han tendido a reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, solo corresponden a pensiones de sobrevivencia o asistenciales, que no cubren todo el daño y dolor producidos, agregando que la pensión de reparación, según ley 19.123, solo promueve la reparación, la cual es compatible con cualquier otra.

En cuanto a la prescripción, reiteró su alegación de la supuesta imprescriptibilidad de la acción civil deducida, conforme a las normas internacionales que ya citó en su demanda y considerando que el hecho de autos es un crimen de lesa humanidad. Citó al efecto una serie de jurisprudencia nacional.

Respecto de la fijación de los montos, reajustes e intereses, dejó para la resolución del tribunal tales circunstancias.

Con fecha 7 de enero de 2020, duplica la demandada, reiterando lo expresado en su contestación, reproduciendo al efecto de su defensa, una jurisprudencia de la Corte Suprema.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

Con fecha 31 de enero de 2020, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos.

Con fecha 5 de mayo de 2020, se presentó avenimiento por los actores, don Mario Evans Meza Silva, Rafael Orlando Silva Solís y don Álvaro Florín Bernal Gaete y la demandada, poniendo término al juicio en relación a dichos demandantes, cuya solicitud fue acogida en resolución de 18 de mayo de 2020.

Con fecha 22 de julio de 2022, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la demandante, doña **Claudia Andrea Pérez Videla**, dedujo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de **Fisco de Chile**, ambas ya individualizadas, pretendiendo se condene a la demandada a pagar a los actores, la suma de \$150.000.000, para cada uno de ellos, más intereses y reajustes, a contar de la notificación de la demanda o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad, con costas

Funda su pretensión en los argumentos de hecho y fundamentos de derechos relatados latamente en lo expositivo del presente fallo.

La demandada, por su lado, ha pedido el rechazo de la demanda, conforme a los argumentos de hecho y de derecho ya descritos, en forma lata, en la parte expositiva de esta sentencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

SEGUNDO: Que han resultado hechos no controvertidos en el proceso, aceptados por ambas partes, que la actora es, efectivamente, una víctima de violación de derechos humanos durante el desarrollo de la Dictadura Militar, reconocido en Informe Valech y que el Estado ha efectuado acciones de reparación, mediante pensiones asistenciales y simbólicas.

TERCERO: Que la discusión esencial del pleito judicial, ha rondado en cuanto a si las acciones de reparación efectuadas por el Estado habrían sido suficientes para reparar el daño sufrido por la actora; en si la acción deducida se encontraría prescrita; como también, en si la pretensión indemnizatoria de la actora resultaría desproporcionada, relacionado ello con la extensión que habría tenido el daño moral que padeció aquella.

Conforme al silencio de la demandada y de la actora, en su caso, deben estimarse controvertidos, además, los alcances de los apremios que habría padecido la madre de la actora en los periodos en que estuvo detenida por agentes del Estado.

CUARTO: Que la actora rindió la siguiente prueba, a fin de justificar sus argumentos:

Documental:

- a) Copia de página de Informe Valech, referido a la actora, agregado al expediente digital con fecha 5 de noviembre de 2019, no objetado;



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

- b) Copia de carpeta de antecedentes de la actora en Instituto Nacional de Derechos Humanos, agregada al expediente digital con fecha 2 de abril de 2022, en folio 56 y con fecha 25 de mayo de 2022, en folio 59, no objetada; y
- c) Copia de Informe Psicológico Pericial de la actora, efectuado por psicólogo don Cristian Vilches Guerra, agregado al expediente digital con fecha 29 de junio de 2022, en folio 62, no objetado.

QUINTO: Que, por su parte, la demandada rindió la siguiente prueba documental para justificar sus defensas o desvirtuar los argumentos y pruebas del actor:

Oficio Ord. N°63337-2020, de 16 de enero de 2020, del Instituto de Previsión Social, agregado al expediente digital con fecha 24 de enero de 2020, en folio 20, no objetado.

SEXTO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, la que se ha limitado a instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones, fundadas en causal legal, respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce pleno valor probatorio a los instrumentos señalados, según su naturaleza, salvo los documentos privados emanados de terceros que no hayan sido ratificados en juicio, los que, en todo caso, serán considerados como indicios, como ocurre con el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

caso del informe psicológico acompañado por la actora; y se tienen como instrumentos públicos en juicio, los que tengan dicha naturaleza.

SÉPTIMO: Que conforme a los hechos reconocidos por las partes, se debe tener como hechos justificados en el proceso, la veracidad de haber sido la actora una víctima por prisión política de su madre durante el régimen militar en dictadura, producido con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, y víctima de violación a los derechos humanos, por las torturas efectuadas por agentes de dicha Dictadura Militar a la madre de ésta, cuando ella estaba en el vientre materno de la misma; y que resulta efectivo, también, que la actora ha sido beneficiada con reparaciones de parte del Estado, por su calidad de víctima de torturas, recibiendo, al menos, ciertas pensiones asistenciales, lo cual se desprende del reconocimiento efectuado en el escrito de réplica, donde las estimó insuficientes y que serían compatibles con la indemnización demandada en autos.

OCTAVO: Que previo a verificar si se dan los presupuestos para acceder a la responsabilidad extracontractual del Estado, por acciones de sus agentes, deberá revisarse si se dan los presupuestos legales para acceder a la primera defensa argumentada por el Fisco de Chile, esto es, la excepción de reparación integral deducida.

NOVENO: Que la excepción de reparación integral e improcedencia de la indemnización, deducida por la demandada se ha sustentado, esencialmente, en haberse producido una



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

reparación del daño moral demandado, conforme a lo previsto en la Ley N°19.123, y en que la actora habría recibido, puntualmente, beneficios de la Ley N°19.992 sobre prisioneros y torturados políticos, en virtud de haber sido calificada como víctima de presión política y tortura del Informe de la Comisión Valech, consistente en pensión asistencial; además, de beneficios en derecho de gratuidad en prestaciones médicas, según Ley N°19.234, otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, en todos los servicios de salud públicos del país, que comprenden profesionales de atención exclusiva; beneficios educacionales, consistentes en becas para la víctima, para un hijo o para un nieto de aquel; y beneficios de vivienda, correspondientes a subsidios para tal efecto.

DÉCIMO: Que como ya ha quedado asentado en la motivación séptima, los actores han reconocido en juicio, en sus escritos de contestación y réplica, que son efectivas las prestaciones económicas que ha percibido del Estado, en su calidad de víctima de prisión política, tortura y exonerada política y que, por tanto, se le ha hecho pago de diversas sumas que comprenden a tales beneficios, no precisados por ella.

Por otra parte, conforme el mérito del informe remitido por Instituto de Previsión Social, de fecha 16 de enero de 2020, agregado al expediente digital con fecha 24 de enero del mismo año, en folio 20, no objetado, puede establecerse por el tribunal, fehacientemente, que los actores han percibido como beneficios de reparación de las leyes números 19.992 y 20.874, desde



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

octubre de 2011 a diciembre de 2019, las sumas de \$15.713.283, por concepto de pensiones asistenciales, de \$1.000.000, referido a aporte único Ley N°20.874 y \$312.883, por concepto de aguinaldos, siendo el total percibido de \$17.026.166, correspondiendo la pensión actual a esa fecha de \$189.552.-

UNDÉCIMO: Que según lo previsto en el artículo 2° de la Ley N°19.123, en su parte pertinente, se dispone: *“Le corresponderá especialmente a la Corporación:*

1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley.”

De acuerdo a dicha disposición legal, resulta evidente que el objeto de las prestaciones que dicha norma contempla, están destinadas a la reparación del daño moral de las víctimas de presión política y tortura, como es el caso del actor de autos.

DUODÉCIMO: Que de las demás disposiciones de la citada Ley N°19.123, que se refiere a la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y que establece Pensión de Reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que señala, resulta de manifiesto el esfuerzo que ha efectuado el Estado de Chile, para reparar, al menos en parte, el daño sufrido por las víctimas de tortura y prisión política durante el régimen militar, a través de la estructuración de pensiones y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

otros beneficios para los afectados y su grupo familiar, como también, reparaciones simbólicas, referidas a la memoria de los excesos y delitos cometidos en contra de las víctimas de torturas y prisión política de la Dictadura Militar, como memoriales, monumentos, efemérides, museos y otros.

Cabe agregar que la estructura y prestaciones disponibles para los actores, en materia de salud y de forma preferente, a través del programa PRAIS, implican un valor monetario adicional a disposición de ella, independientemente de si ésta opta o no por ocuparlos, lo que ocurre, también, con los beneficios de educación y vivienda.

DÉCIMO TERCERO: Que conforme a lo asentado precedentemente y lo reconocido por los actores en el proceso, debe tenerse por efectiva la reparación integral que ha efectuado el Estado, con motivo de las torturas y prisión política que padeció, indirectamente, de parte de agentes del Gobierno Militar en Dictadura, por las torturas sufrida por su madre, reparación que de acuerdo a las circunstancias y la capacidad económica del Estado de Chile, debe estimarse suficiente, considerando, por una parte, que las torturas y dolor infringido a la demandante, jamás podrían ser reparadas con suma alguna, pero también, por otro lado, que el Estado igualmente ha sido víctima de un gobierno de facto, que alteró la institucionalidad, precisamente, por los órganos llamados a defender al mismo y a las personas que lo componen, no pudiendo, entonces, responsabilizarse en forma exclusiva al Estado de Derecho de tales actos, quien de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

misma forma estaba impedido de defender los derechos de sus ciudadanos y demás miembros del pueblo que lo conforman.

DÉCIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, debe considerarse, también, que ha sido el propio Estado de Chile, el que ha propendido acciones para poder establecer quienes han sido víctimas de tortura y prisión política, durante el régimen militar, para poder, precisamente, tratar de efectuar las reparaciones que en Derecho corresponden, bajo un procedimiento administrativo más simplificado y que opera bajo el principio de la buena fe, evitando la judicialización del establecimiento de la calidad de víctima de violación a los derechos humanos, sobre todo tomando las especiales circunstancias de la actora, quien era una nonata a la época en que ocurrieron los hechos.

DÉCIMO QUINTO: Que, como consecuencia de lo razonado en las motivaciones anteriores, deberá acogerse la excepción de reparación, deducida por la demandada, por haber sido ya indemnizados los actores, lo cual será compensada al analizar la procedencia de la excepción de prescripción interpuesta.

DÉCIMO SEXTO: Que, sin perjuicio de lo referido precedentemente, deberá determinarse, a continuación, si se dan los presupuestos de derecho para poder acoger la excepción de prescripción opuesta, en conjunto con la anterior.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

DECIMO SEPTIMO: Respecto a la prescripción de la acción en materia de derechos humanos se debe considerar, que el sistema de responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6° inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, preceptos que, de aceptarse la tesis de la defensa, quedarían sin aplicación, siendo obligatoria su observancia, que por su parte los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por ilícitos de esta clase, queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas, ni hacer primar el derecho interno, dado que ilícitos imputable a un Estado, surgiendo de esa forma la responsabilidad internacional de éste por la violación de una normas de Derechos Humanos y como consecuencia nace el deber de reparación y de cesar los actos de vulneración denunciada.

De esa forma las normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales de justicia, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran el derecho a la reparación, pues ello comprometería la responsabilidad internacional del Estado de Chile, ya que, el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados disposición constitucional, son vinculantes, como ocurre con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado

DECIMO OCTAVO: Que, es por eso que la interpretación sistemática de las normas que recogen tanto la Ley 19.123 como la Ley 19.992, determina razonablemente concluir que el bono de reparación que en cada una de ellas se instaure en favor de ciertos familiares de ejecutados políticos y de las víctimas directas de delitos de violaciones a los derechos humanos, constituye un beneficio de carácter social, más no una indemnización del daño moral sufrido por ellos, pues no aparece que en la determinación de su monto se hayan considerado los elementos propios, individuales y personales de quienes debieron soportar el sufrimiento; requisito fundamental a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un daño cierto y determinado, sin existir entre ellos una incompatibilidad, la cual no fue establecida, pues en caso alguno importaron la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.

En consecuencia las Leyes 19.123, 19.992 y 20.874, no pueden desplazar la pretensión de resarcimiento del daño moral sufrido por la demandante, a lo que cabe añadir que los beneficios conferidos por dicha normativa sólo apunta a construir una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas o de estas últimas; supeditados a condiciones objetivas para su goce, lo que evidencia que por sus características no se trata de una reparación total y efectiva del daño sufrido por los afectados.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

DECIMO NOVENO: Que, en cuanto a la alegación de prescripción de la acción opuesta por el Fisco demandado, es necesario destacar que en los sucesos reseñados y que constituyen el fundamento de la acción, intervinieron agentes del Estado, lo que evidencia una contravención a lo preceptuado en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, que obliga a los órganos del Estado a someter su acción a ella, a las normas dictadas conforme a la misma y al artículo 5° de nuestra Constitución, en cuanto el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; siendo deber de aquellos respetar y promover tales derechos garantizados. Esta última disposición constitucional hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.

Es así que al tratarse el presente caso de una demanda civil que se sustenta en un delito que, de acuerdo a la conciencia jurídica se denomina de “lesa humanidad”, se puede concluir que tal calificación no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito y declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que también implica la inviabilidad de proclamar la extinción, por el solo transcurso del tiempo, del derecho de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito cuya existencia ha sido pacífica, de forma tal que este tipo de ilícitos, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

VIGESIMO: Que, conforme lo señalado, se concluye que procede de la indemnización que se reclama, atendiendo al contexto en que se verificó el delito, esto es, en un momento de extrema anormalidad institucional, en que los hechores -agentes del Estado- en representación del gobierno de la época, como quedó asentado en el proceso, ejecutaron ilícitos de tal gravedad, que imponen al Estado de Chile la obligación de resarcir el daño causado, tal como se desprende del bloque normativo integrado, entre otros, por el Reglamento de La Haya de 1907, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos, que en su conjunto consagran el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida la restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, imponiendo tal resarcimiento al respectivo Estado que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos.

Sin perjuicio de lo anterior, ahora cabe determinar el *quantum* del detrimento resultado de los agentes del estado, a lo cual se considera lo complejo de su determinación, dado que ningún monto podrá resarcir completamente a los ofendidos, ni restablecerlos a la situación anterior al acaecimiento de los hechos.

Sin embargo la indemnización por daño moral es meramente satisfactoria, lo que viene a significar que con ella se pretende una ayuda o auxilio que le permita a las víctimas atenuar el daño causado.

VIGESIMO PRIMERO: Que, en relación con lo anterior, ha quedado demostrado que los actores son víctima de violaciones a los derechos humanos, puesto que sufrieron privación ilegítima de libertad y torturas por razones políticas, perpetradas por agentes del Estado, en los términos y magnitudes que se



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

consignaron en este fallo. Luego, la pretensión indemnizatoria, claramente deriva de los padecimientos físicos y emocionales que han tenido que sobrellevar; hechos que además, de no haber sido controvertidos, se encuentran comprobados con la documental agregada al proceso, la que da cuenta de las secuelas psicológicas y de traumas que sufren las personas que han sido objeto de torturas, además de la presentación del sicólogo Cristian Vilchez Guerra respecto de la actora Claudia Andrea Pérez Videla, lo que es coincidente con las dolencias y secuelas que se consignaron en la demanda, que no han sido objeto de contradicción, dando cuenta del estrés post traumático de carácter grave y extenso que afecta a los actores, alteraciones en su salud mental producto de los acontecimientos que debió enfrentar como víctima de prisión política y tortura; y por lo tanto, conforme a la experiencia científica, los menoscabos permanentes en la salud mental y física de las víctimas de este tipo de ilícitos;

VIGESIMO SEGUNDO: Que, con todo lo señalado, la cuantificación del daño se hará prudencialmente por el tribunal, habida consideración la naturaleza, entidad y extensión del mismo, teniendo para ello especialmente presente, las circunstancias en que se produjeron los hechos, la edad de los actores a la época en que fueron detenidos e ilegítimamente apremiados; la duración y entidad de los padecimientos físicos y emocionales sufridos; y los montos judicialmente asignados tanto a las víctimas directas de violaciones a los derechos humanos en causas similares, como a los hijos y padres de ejecutados políticos.

La suma que se fijará a título de indemnización, deberá pagarse reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha que la presente sentencia



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

quede ejecutoriada y su pago; así reajustada, devengará intereses corrientes para operaciones reajustables en el mismo lapso.

Por estas consideraciones, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 160, 170, 254 y siguientes, 342, 399, 426 del Código de Procedimiento Civil; 1°, 4°, 6°, 7°, 19, 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 4.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas; La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Los Convenios de Ginebra de 1949; Principios de Núremberg; y art.7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se declara:

I.- Que **se acoge**, la demanda deducida en lo principal del escrito de 11 de noviembre de 2019, y se condena al demandado a pagar a los actores, **Mario Evans Meza Silva, Álvaro Florín Bernal Gaete; Rafael Orlando Silva Solís y Claudia Andrea Pérez Videla**, la suma de **50.000.000** (cincuenta millones de pesos) **a cada uno**, por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral.

II.- Se **acoge** la excepción de reparación integral del Estado



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>


Código: WVSXFKRWHP

III.- Se rechaza, la excepción de prescripción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado.


Anótese, regístrese y notifíquese.

Pronunciada por doña Cecilia Pastén Pérez, Juez Suplente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art.162 del C.P.C. en Santiago, a treinta y uno de dos mil veintitrés.



Cecilia Irene Pastén Pérez
Juez
PJUD
Treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés
16:39 UTC-4





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WVSXFKRWHP

NOMENCLATURA : 1. [46]Aclara o rectifica sentencia
JUZGADO : 24º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-31891-2019
CARATULADO : PÉREZ/FISCO DE CHILE

Santiago, ocho de Agosto de dos mil veintitrés

A la presentación de fecha 31 de julio de 2023, folio 74, del cuaderno principal: Por evacuado el traslado de la parte demandada.

Estese a lo que se resolverá.

A la presentación de fecha 20 de julio de 2023, folio 70, del cuaderno principal:

Vistos y teniendo presente:

1º Que en la presentación de folio 70, Francisco Bustos Bustos, por la demandante, interpone recurso de aclaración, rectificación y enmienda en contra de la sentencia de 31 de mayo de 2023, folio 67, pidiendo se rectifique en lo resolutivo “I.- Que se acoge la demanda deducida en lo principal del escrito de 11 de noviembre de 2019, y se condena al demandado a pagar a los actores, Mario Evans Meza Silva, Álvaro Florín Bernal Gaete; Rafael Orlando Silva Solís y Claudia Andrea Pérez Videla, la suma de 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada uno, por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral”. Refiere que existe un error puesto que los demandantes Mario Evans Meza Silva, Álvaro Florín Bernal Gaete y Rafael Orlando Silva Solís alcanzaron un avenimiento con el Consejo del estado, el que se tuvo por aprobado en autos con fecha 18 de mayo de 2020, y que a raíz de lo anterior, el juicio continuó solamente con la demandante doña Claudia Pérez Videla y el Fisco, modificándose la caratula del expediente, mediante resolución de fecha 19 de junio de 2023. fallo, en cuanto al establecer la responsabilidad solidaria de la demandada, se hace en conformidad al artículo 169 inciso final del

2º Que del mérito de los antecedentes, el avenimiento acompañado a folio 27 y lo expuesto por el demandante, en cuanto a la solicitud de modificar el error de copia en el punto I, de lo resolutivo se observa que efectivamente se erró al incluir a don Mario Evans Meza Silva, Álvaro Florín Bernal Gaete y Rafael Orlando Silva Solís, debiéndose sólo señalar a doña Claudia Pérez Videla, por lo que no cabe más que acoger su solicitud en los términos indicados, como se dirá al resolver.

Y vistos, además lo dispuesto en el artículo 170, 182 del Código de Procedimiento Civil, **se declara:**

-Ha lugar a la solicitud de folio 70, sólo en cuanto a que se rectifica la sentencia definitiva de 31 de mayo de 2023, en los siguientes términos:

Donde dice: “I.- Que se acoge, la demanda deducida en lo principal del escrito de 11 de noviembre de 2019, y se condena al demandado a pagar a los actores, Mario Evans Meza Silva, Álvaro Florín Bernal Gaete; Rafael Orlando Silva Solís y Claudia Andrea Pérez Videla, la suma de 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada uno, por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral”

Debe decir: “I.- Que se acoge, la demanda deducida en lo principal del escrito de 11 de noviembre de 2019, y se condena al demandado a pagar a la actora, doña Claudia Andrea Pérez Videla, la suma de 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios, a título de daño moral”



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>


Código: BQPNXGCLZFX

Rija en todo lo demás la resolución procesal aludida, y téngase la presente decisión jurisdiccional como parte integrante de la misma. Notifíquese conjuntamente con la sentencia rectificadora de fecha 31 de mayo de 2023.

Proveyendo derechamente el recurso de apelación interpuesto por el demandante con fecha 20 de julio de 2023, a folio 71: Reitérese una vez notificada a las partes la sentencia de fecha 31 de mayo de 2023 y la presente resolución que rectifica la misma.

Proveyendo derechamente el recurso de apelación interpuesto por la demandada con fecha 21 de julio de 2023, a folio 72: Reitérese una vez notificada a las partes la sentencia de fecha 31 de mayo de 2023 y la presente resolución que rectifica la misma.

En **Santiago**, a **ocho de Agosto de dos mil veintitrés**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente./pqu



Cecilia Irene Pastén Pérez
Juez
PJUD
Ocho de agosto de dos mil veintitrés
18:11 UTC-4



NOMENCLATURA : 1. [46]Aclara o rectifica sentencia
JUZGADO : 24 º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-31891-2019
CARATULADO : PÉREZ/FISCO DE CHILE

Santiago, catorce de Septiembre de dos mil veintitrés

Proveyendo a la presentación de folio 76:

Vistos:

Evidenciándose del análisis de los antecedentes la existencia de un error en la fecha de la sentencia dictada con fecha 31 de mayo de 2023, con el propósito de evitar futuras nulidades y en uso de las facultades correctoras de procedimiento contenidas en el inciso 4º del artículo 84, en relación a los artículos 160 y 171 del Código de Procedimiento Civil, se rectifica la mencionada resolución, en los siguientes términos:


En donde dice: “.....treinta y uno de dos mil veintitrés.”

Debe decir: “...treinta y uno de mayo dos mil veintitrés....”


Rija en todo lo demás la resolución aludida.

Notifíquese la presente resolución.-/nvr

En Santiago, a catorce de Septiembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Cecilia Irene Pastén Pérez
Juez
PJUD
Catorce de septiembre de dos mil veintitrés
12:55 UTC-3





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QTFEXHJKBPX